



# **Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer**

Distr. general  
23 de abril de 2015

Original: español

---

## **Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer**

### **Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Chile**

Adición

### **Información suministrada por Chile sobre el seguimiento de las observaciones finales\***

[Fecha de recepción: 26 de febrero de 2015]

---

*Nota:* el presente documento se distribuye en español, francés e inglés únicamente.

\* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

15-06327 (S) 300415 110515



Se ruega reciclar



## Antecedentes

En el párrafo 56 de las Observaciones Finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile (CEDAW/C/CHL/CO/5-6), referido al “Seguimiento de las observaciones finales”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió al Estado de Chile que en el plazo de dos años proporcionara información por escrito sobre las medidas adoptadas para implementar las recomendaciones contenidas en los párrafos 19 letra a (sobre violencia contra las mujeres) y 25 letras a y b (referidas a la participación en la vida política y pública de las mujeres).

A continuación, de acuerdo a lo solicitado por el Comité, se cumple con dar cuenta de las principales medidas adoptadas en el ámbito interno para dar cumplimiento a las recomendaciones señaladas:

### I. Violencia contra las mujeres:

#### 19. El Comité exhorta al Estado parte a que:

*a) Modifique la Ley de violencia intrafamiliar (Ley N° 20.066) para que incluya una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque la violencia física y la psicológica y elimine el requisito del “maltrato habitual” a fin de que puedan realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia doméstica y se procese a los autores;*

Al respecto, es posible señalar que la Ley 20.066, actual Ley de Violencia Intrafamiliar, abarca tanto la violencia física como psicológica. Sin embargo, ésta se circunscribe solo al ámbito familiar y de relaciones de pareja, dejando fuera otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Es por ello que en el Programa de Gobierno de la Excm. Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, se ha comprometido la modificación de la actual Ley de Violencia Intrafamiliar incorporando todo tipo de violencia de género, en contra de las mujeres, y no sólo aquella que se vive dentro de las familias o entre cónyuges, ya sea que estos tipos de violencia (pareja, sexual, u otros) se verifiquen en el ámbito público o privado.

Ello ha implicado evaluar la eficacia de la Ley N° 20.066 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, marco en el cual también se evaluará el delito de maltrato habitual. Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que hoy la violencia psicológica y física sin lesiones, aunque no tenga el carácter de “habitual”, se encuentra sancionada en procedimiento ante los tribunales de familia.

En el marco de la política para erradicar la violencia contra las mujeres que está desarrollando Chile, y para dar cumplimiento al programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, el Servicio Nacional de la Mujer convocó en el mes de julio de 2014 a la formulación del **Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres**, cuyo diseño se presentó para su implementación progresiva durante el período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La estructura organizativa de este Plan Nacional de Acción contempla una **Coordinación General** conformada por las máximas Autoridades de cada organismo público; un **Comité Técnico** en el que participan las contrapartes de cada una de las instituciones involucradas y de los y las representantes de Organismos Internacionales como de la Sociedad Civil.

Este Plan Nacional persigue los objetivos de fortalecer las competencias en los distintos sectores para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, formulando estrategias para impulsar acciones que la aborden nacionalmente. En ese marco se ha iniciado un proceso de revisión de las fortalezas y nudos críticos de la Ley 20.066 de VIF, y se ha comenzado a trabajar para producir, articular y registrar unificadamente información para el conocimiento y comprensión de la violencia contra las mujeres en Chile sentando las bases de un sistema integrado de información.

Esta estrategia que el Gobierno viene desarrollando se enmarca en los diversos instrumentos internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, destacando especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).

En el marco del Plan Nacional de Acción, el 10 de septiembre de 2014 se estableció la **Comisión “Nudos Críticos y fortalezas de la ley N° 20.066”**, cuyo objetivo es visualizar las fortalezas y nudos en la actual aplicación de la norma, así como en las modificaciones necesarias para dotar a Chile de una normativa de violencia de género contra las mujeres que amplíe sus manifestaciones y ámbitos.

Esta comisión está conformada por integrantes de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Sus productos serán:

1. Diagnóstico de la actual ley N° 20. 066.
2. Debate y reflexión sobre desafíos de una nueva normativa de violencia de género contra la mujer.
3. Informe Parcial, que contiene estado de avance de Diagnóstico de la actual Ley 20.066 y desafíos de una nueva normativa de violencia de género contra la mujer.
4. Informe Final, que contiene sistematización total de los proceso de:
  - i) Diagnóstico de la Ley actual Ley N° 20.066;
  - ii) Discusión sobre ideas mayoritarias, puntos de diferencias importantes y procesos complejos.

Los resultados obtenidos por esta comisión servirán de insumo para un proyecto de ley de modificación de la ley N° 20.066 que será presentado ante el Congreso Nacional durante el segundo semestre del año 2015.

Una de los acuerdos relevantes de esta Comisión se refiere a la necesidad de avanzar hacia una normativa integral de violencia contra las mujeres. Este tránsito implica un cambio cualitativo desde la legislación actual sobre violencia intrafamiliar (de primera generación), hacia una legislación de segunda generación, es decir, una normativa que aborde de forma integral la violencia de género contra las mujeres, no solo en el ámbito doméstico o familiar, sino que también en los espacios públicos, considerando las diversas manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres en el país.

## II. Participación en la vida política y pública:

### 25. El Comité exhorta al Estado parte a que:

*a) Considere la posibilidad de adoptar, cuando sea necesario, medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la participación plena e igual de la mujer en la vida pública y política;*

*b) Intensifique los esfuerzos para aumentar la participación de la mujer en la vida pública en los planos nacional y municipal, lo que incluye la organización de campañas de sensibilización dirigidas también a las mujeres indígenas, el ofrecimiento de incentivos a los partidos políticos para que designen un número igual de mujeres y hombres en las candidaturas y la financiación adecuada de las campañas de las mujeres que sean candidatas;*

En relación con las citadas recomendaciones, puede informarse que el Programa de Gobierno de la Excm. Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, establece que se dispondrán “*medidas de partición equilibrada de mujeres y hombres en el Congreso, las directivas de los partidos políticos, las instituciones públicas, en cargos directivos y directorio de empresas con participación del Estado, en el gabinete ministerial y gobierno regionales; desarrollaremos programas de difusión de los derechos y un Fondo Nacional para apoyar iniciativas que fortalezcan la asociativa y el liderazgo de las mujeres*”.

Para cumplir los compromisos plasmados en este enunciado, se están llevando a cabo acciones en diferentes ámbitos:

En materia electoral se impulsó el **proyecto de ley que “Sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”**. Este proyecto, presentado mediante Mensaje Presidencial, fue ingresado al Congreso Nacional con fecha 06 de mayo de 2014 (Boletín 9326-07) y aprobado en Tercer Trámite Constitucional ante la Cámara de Diputados con fecha 20 de enero de 2015, encontrándose pendiente en la actualidad el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional.

La aprobación de este proyecto de ley no solo permitirá avanzar en la proporcionalidad de nuestro sistema electoral parlamentario, sino que además incorpora un criterio de paridad de género en la conformación de las listas, según el cual no puede haber ningún sexo representado por sobre el 60% ni por bajo del 40% del total de candidatos/as.

Además del criterio de paridad género en reforma al sistema electoral, se establece que la infracción a la norma de paridad acarrea el rechazo de todas las candidaturas del partido que no hayan cumplido con dicho requisito, sin perjuicio de la posibilidad de corregir la proporción de candidaturas al porcentaje de género establecido. Igualmente, se establece un incentivo económico tanto para las candidatas —se establece un mayor reembolso de 0,0100 Unidades de Fomento por cada voto que obtengan— con independencia de si resultan electas o no, como para los partidos —500 Unidades de Fomento por candidatas electas. El incentivo a los partidos busca promover que éstos efectivamente apoyen a sus candidatas y no las dejen con pocas posibilidades de electividad. Tanto la cuota de género, como los incentivos financieros, tienen carácter transitorio (temporal), y se aplicarán a las próximas cuatro elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029. Por último, se establece que el partido político que desee someterse al sistema de elecciones

primarias en las elecciones parlamentarias de los años 2017, 2021, 2025 y 2029 solo podrá hacerlo en un porcentaje similar al 40% de las candidaturas a diputado(a) o senador(a) que puedan declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral.

Por otra parte, respecto a la difusión de derechos y el incentivo del liderazgo de las mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer, desarrolló, durante el año 2014, 43 **Escuelas de Formación de Liderazgo**, a lo largo de las 15 regiones del país, en las cuales se formaron 746 mujeres. Estas escuelas tuvieron como objetivo:

1. Fomentar y fortalecer los liderazgos femeninos para que las participantes se conviertan en voceras de sus comunidades o grupos de interés, siempre desde un enfoque de género.

2. Constituir espacios de encuentro entre mujeres de distintas edades y realidades, que les permita identificar necesidades comunes respecto de su condición y posición en comparación con sus pares varones, promoviendo así la asociatividad entre ellas y contribuyendo a un ejercicio del liderazgo alejado de los cánones tradicionales jerarquizados y poco participativos.

Para fortalecer esta línea de trabajo, el programa de Participación 2015–2018 del Servicio Nacional de la Mujer, se ha propuesto incorporar tres componentes. El primer componente, se expresa en la prioridad por el trabajo con mujeres no organizadas para la difusión de sus derechos. Este trabajo permitirá reconocer a las mujeres como sujetas de derechos humanos y que pueden tener una acción pública coincidente con este reconocimiento.

El segundo componente del programa, buscará fomentar la asociatividad de las mujeres, cuyo principal objetivo es hacer visibles las diferentes trabas y brechas que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, tanto como sus propuestas para resolver estas situaciones. Este componente dotará de las herramientas para la interlocución con otras organizaciones y con el Estado.

El tercer componente, de fomento del liderazgo, buscará que las mujeres sean capaces de representar las principales demandas de sus comunidades y de las mujeres, así como instalar estas realidades en las agendas públicas con capacidad de interlocución y negociación con otros/as actores/as.

Por otro lado, en el marco de las definiciones estratégicas 2015-2018 y del criterio de interculturalidad transversal a sus políticas y programas, el Servicio Nacional de la Mujer, en coordinación con la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, desarrolló durante el año 2014 cuatro **Encuentros Zonales con mujeres de pueblos indígenas**. Estos encuentros se impulsaron con el objetivo de diagnosticar participativamente sus intereses y demandas, para el diseño de un plan de acción para abordar los derechos de las mujeres (económicos, sexuales, políticos, una vida libre de violencia y otros) considerando su cosmovisión y cultura. Los resultados obtenidos en estas instancias permitirán retroalimentar el accionar del Sernam y sus Programas, así como del futuro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Los encuentros tuvieron una importante participación de mujeres de la mayoría de los pueblos originarios de Chile (aymara, licanantay, kolla, mapuche, quechua, rapanui, diaguita, además de las afrodescendientes), concurriendo mujeres de todas las regiones del país, en torno a cuatro puntos de ejecución: Región de

Antofagasta<sup>1</sup>, Región del Libertador General Berrando O'Higgins<sup>2</sup>, Región Metropolitana y Región de la Araucanía<sup>3</sup>.

Por último, es posible mencionar la presentación por parte del Ejecutivo del **proyecto de ley “para el fortalecimiento y transparencia de la democracia”**, ingresado al Congreso con fecha 16 de diciembre de 2014 (Boletín 9790-07).

Este proyecto de ley se enmarca en una serie de reformas impulsadas con el fin de fortalecer nuestro sistema democrático y se caracteriza por intensificar de manera más certera, el control democrático, la publicidad y transparencia del financiamiento de la Política.

Desde la perspectiva de la participación de las mujeres en el ámbito público, puede destacarse que el proyecto, a fin de conseguir una mayor equidad en la política y en las campañas, establece un aporte trimestral para los partidos políticos que cuenten con representación en alguna de las cámaras del Congreso a fin de que cuenten con recursos para atender a los gastos esenciales de su funcionamiento ordinario y desarrollar actividades de investigación, fomento a la participación de mujeres y jóvenes en la política, de formación cívica de los ciudadanos y de elaboración de estudios que apoyen la labor parlamentaria y el diseño de políticas públicas. Se dispone que un reglamento del Ministerio Secretaría General de la Presidencia determinará qué gastos se considerarán como esenciales de funcionamiento ordinario y los porcentajes de los aportes que deberán ser destinados a cada uno de los destinos señalados, estableciéndose que “[e]n todo caso, al menos un 10% del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres”. La contabilidad de los fondos públicos y de los aportes privados que reciban se deberán llevar por separado y mantener a disposición del público a través de sus sitios web, desglosándose el balance mensual de ingresos y gastos en las categorías que se indican, entre ellas la establecida en la letra l) “Gastos de las actividades de fomento a la participación femenina” (nuevo inciso 2 artículo 34, Ley 18.603).

Este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados.

---

<sup>1</sup> Regiones de Arica y Parinacota; Iquique; Antofagasta; Atacama.

<sup>2</sup> Regiones de O'Higgins; Coquimbo; Valparaíso; Maule.

<sup>3</sup> Regiones de Araucanía; Bio Bio; Los Ríos; Los Lagos; Aysén; Magallanes.